

La marcha para la protección de los derechos de los trabajadores y la clase media

Cathy Feingold

En 2011 miles de trabajadores salieron a la calle y ocuparon las capitales de los estados de Wisconsin, Ohio e Indiana. La marcha de Madison, Wisconsin, de marzo de 2011, prendió la mecha de otras protestas, en otros estados del país, de trabajadores y afiliados sindicales, que se manifestaron delante de edificios estatales para defender los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Condenaban los ataques perpetrados por sus gobernadores republicanos para suprimir el derecho de negociación colectiva, promulgar legislación antisindical y culpar a los empleados del sector público y a sus sindicatos de la crisis presupuestaria generalizada.

Estos ataques reflejan algunos de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la protección de los trabajadores del sector público desde la huelga de 1981 de la Organización Profesional de Controladores del Tráfico Aéreo (PATCO), cuando el Presidente Reagan despidió a los controladores aéreos que hacían huelga y allanó el camino para permitir la sustitución de trabajadores. El pueblo estadounidense entiende que lo que está en juego no son sólo los salarios y las prestaciones de los trabajadores del sector público, sino también su derecho a la negociación colectiva. Mientras los gobernadores republicanos afirman que el déficit presupuestario es lo que motiva sus decisiones, su verdadero programa consiste en atacar el derecho de negociación colectiva y debilitar a los sindicatos.

Los manifestantes ocuparon capitales estatales que también son lugares cuyas poblaciones están luchando para recuperarse económicamente. Con un desempleo que en los Estados Unidos se acerca al 8,3 por ciento, un subempleo de casi un 16 por ciento, y un crecimiento del empleo lento sólo en sectores que requieren cualificaciones escasas o muy altas, la mayoría de los trabajadores desempleados tienen que hacer verdaderos esfuerzos para asegurarse una posición de nivel medio. Asimismo, con la pérdida de puestos mejor remunerados en la industria de la manufactura sindicalizada, muchos trabajadores se han dirigido hacia el sector privado para poder acceder con seguridad a la clase media. Pero los presupuestos públicos están sufriendo la contención de ingresos consecuencia del elevado desempleo y de la caída del precio de la vivienda. La propuesta de eliminación de la negociación colectiva, que hace que a los trabajadores

del sector público les sea aún más difícil mantener su nivel de vida (en su condición de consumidores, cuando compran una casa, etc.), sólo servirá para perjudicar aún más los presupuestos del Estado y menoscabar la economía en general.

Los estadounidenses saben que el camino hacia la recuperación económica sigue siendo inestable y que el desempleo y subempleo ininterrumpidos y los precios en aumento del petróleo y los alimentos siguen amenazando la plena recuperación. No obstante, a pesar de la constante inseguridad económica, el pueblo estadounidense se

El pueblo estadounidense se opone a todo intento de utilizar los debates sobre el déficit público como excusa para despojarlo del derecho de negociación colectiva

opone a todo intento de utilizar los debates sobre el déficit público como excusa para despojarlo del derecho de negociación colectiva, por el que tanto y tan duro tuvo que luchar. Más de dos millones de personas firmaron peticiones para recordárselo al Gobernador de Wisconsin y los ciudadanos acudirán a las urnas antes de que finalice 2011 para votar y volvérselo a recordar.

En una encuesta de opinión llevada a cabo durante las manifestaciones para defender la negociación colectiva celebradas en Wisconsin, el 64 por ciento¹ de las personas encuestadas apoyó el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del sector público. El 63 por ciento, incluido un 55 por ciento de republicanos, señaló que a los estados que registraban déficit y afirmaban que no podían pagar todas las pensiones prometidas a los jubilados actuales no se les debería permitir romper sus compromisos. Incluso después de que los trabajadores acordasen concesiones en relación con los salarios y las prestaciones, los gobernadores republicanos siguieron dirigiendo sus ataques al derecho de negociación colectiva.

¿Por qué continúan estos ataques si la mayoría de los estadounidenses apoya el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva? Es muy sencillo. Las elecciones de 2010 trajeron consigo a un grupo nuevo de gobernadores y legisladores republicanos en diversos estados que están presentando propuestas legislativas para eliminar o debilitar a los sindicatos, un colectivo clave y base de apoyo para los demócratas. La verdadera meta de los republicanos es reducir la sindicación en el sector público (que ahora representa al 37 por ciento de los funcionarios) al mismo nivel insuficiente que en el sector privado, donde en la actualidad sólo representa el 6,97 por ciento de su fuerza de trabajo. En 2011 de los 14,8 millones de afiliados sindicales en los Estados Unidos 7,6 millones trabajaban para el sector público². Si debilitan el poder de los sindicatos, los gobernadores republicanos debilitan al Partido Demócrata. Aunque está claro que no se trata únicamente de un ataque a los sindicatos, que históricamente han sido una base fundamental para el Partido Demócrata, sino también supone un ataque a la clase media. En los Estados Unidos la mayoría de los trabajadores recibe una protección social mínima de los empleadores. Los planes de pensiones de beneficios definidos han sido sustituidos por planes de ahorro privatizados, llamados Planes 401k,

y los trabajadores pagan primas más elevadas en concepto de cobertura de salud. Aunque actualmente registran unos beneficios de 1.800 millones, las empresas alegan que, si quieren seguir siendo competitivas, no pueden aumentar los salarios ni conceder más prestaciones. Con este modelo sólo se aumenta la desigualdad en el país donde el 5 por ciento más adinerado controla el 63,5 por ciento de la riqueza nacional³. La economía de los Estados Unidos se encuentra en una espiral negativa en la que los trabajadores se ven obligados a competir por empleos inseguros, cada vez peor remunerados y sin derecho a prestaciones.

En el debate actual sobre la negociación colectiva y los sindicatos, sus detractores se apoyan en el falso supuesto de que los trabajadores del sector público son los causantes de las crisis presupuestarias, por lo que ahora deben cargar con las consecuencias renunciando a sus derechos, salarios y prestaciones. Mientras se culpa a los trabajadores del sector público y a los sindicatos de los déficit presupuestarios, los cargos elegidos no se arriesgarán a apoyar un aumento de los impuestos para los más ricos y para las empresas como alternativa razonable a los ataques a la clase media y a los trabajadores ordinarios. La mayoría entiende que, de hacerlo, haría peligrar su acceso a financiación para campañas electorales.

Mientras los sindicatos de Wisconsin se preparan para las nuevas elecciones, que podrían sustituir a los republicanos que votaron a favor del proyecto de ley contra los sindicatos por los demócratas que lucharían por revocarla, los sindicatos de Ohio celebran su victoria al ver revocada la legislación extremadamente antisindical que hubiese limitado el derecho a la negociación colectiva de 350.000 trabajadores y eliminado el arbitraje vinculante y el derecho a huelga. Incluso con esta victoria, los ataques siguen extendiéndose por todo el país con leyes que perjudican a los trabajadores.

En 2012 la legislación relativa al «derecho al trabajo» planteará un desafío clave para los sindicatos estadounidenses. A pesar de su nombre, la legislación sobre el «derecho al trabajo» no aporta una mayor seguridad en el empleo, sino que más bien debilita la negociación sindical haciendo que el cobrar las cuotas sindicales y mantenerse financieramente sea más difícil para los sindicatos. Los defensores de la legislación sobre el «derecho al trabajo» afirman que debilitando a los sindicatos y reduciendo los costos laborales ayudarán a atraer inversiones a sus estados, especialmente en el sector manufacturero. Afirman asimismo que, con esta legislación, los estados salen ganando, pero estudios demuestran que en los estados con legislación sobre el «derecho al trabajo», donde los sindicatos han perdido fuerza, los trabajadores han visto sus salarios reducidos en 1.500 dólares de los Estados Unidos al año, tanto en el caso de los trabajadores sindicados como en el de los que no lo están, y disminuidas las posibilidades de cobertura en materia de salud o las pensiones de beneficios definidos que proporcionan los empleadores⁴. En febrero de 2012 Indiana se convirtió en el vigésimo

tercer estado con legislación sobre el «derecho al trabajo» en los Estados Unidos, y está previsto que trece estados sigan su ejemplo.

Los ataques a los trabajadores no sólo apuntan a los derechos de los trabajadores del sector público y de los sindicatos, sino también a los derechos de los trabajadores inmigrantes y votantes. En junio de 2011 Alabama promulgó la ley antiinmigración más restrictiva del país, que permite a la policía detener a inmigrantes si sospecha que están indocumentados y exige a las oficinas gubernamentales que comprueben el permiso de residencia en los trámites cotidianos, incluida la obtención de un puesto de trabajo, la matriculación de niños en la escuela y la renovación de los permisos de las empresas. Alabama también aprobó una ley de elaboración del censo que se adoptará en 2014. En los Estados Unidos la obtención de los documentos de identidad no es automática, así que para obtenerlos, los trabajadores tienen que pedir horas libres en su trabajo y abonarlos. La ley intenta crear otra barrera al voto en las comunidades que tradicionalmente apoyan al Partido Demócrata, como los latinos, las personas de edad y los jóvenes afroamericanos. Alrededor del 62 por ciento de los votantes latinos registrados afirma que se identifica con el Partido Demócrata o lo siente más afín⁵, por lo que las leyes antiinmigración y de elaboración del censo se consideran intentos directos de suprimir su voto. Leyes antiinmigración y de elaboración del censo similares están introduciéndose a lo largo de los Estados Unidos.

En 2012 seguirán los ataques a los trabajadores, los sindicatos y los inmigrantes. Mientras se sigue culpando a los trabajadores del sector público de disfrutar de salarios y prestaciones elevadas, los políticos conservadores intentan conseguir apoyos para aplicar recortes masivos en el gasto social, promover medidas que favorezcan a la clase más opulenta y reducir considerablemente el sector público. En realidad, los elevados déficit presupuestarios del país no los ha provocado una remuneración excesiva a los maestros, los bomberos u otros funcionarios. Los males presupuestarios del país están

**La eliminación
de la negociación colectiva
sólo servirá para frenar
la demanda en la economía**

más relacionados con las recientes crisis económica y financiera en el mercado inmobiliario y los regímenes impositivos injustos. Las prácticas financieras imprudentes de Wall Street, y no la codicia de los educadores de los jardines de infantes, son las que han traído consigo

la recesión y sus efectos negativos en el empleo y los presupuestos públicos. El llamamiento a la eliminación de la negociación colectiva y a la austeridad económica y los ataques a los trabajadores y a los votantes inmigrantes no resolverán las causas principales y sólo servirán para frenar la demanda en la economía. La utilización de la crisis fiscal actual por parte de los políticos para despojar a los trabajadores de sus derechos e imponer rigurosas restricciones a los salarios y a las prestaciones creará mayores dificultades para los trabajadores y las familias de clase media que luchan para recobrar el equilibrio.

Notas

¹ Encuesta de Bloomberg de ámbito nacional, 4 a 7 de marzo de 2011.

² Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos: <http://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf> (acceso marzo de 2012).

³ Economic Policy Institute: http://www.epi.org/publication/top_5_holds_more_than_half_of_the_countrys_wealth/ (acceso marzo de 2012).

⁴ H. Shierholz y E. Gould: *The compensation penalty of «right-to-work» laws*, 17 February 2011, Washington, DC, Economic Policy Institute, <http://www.epi.org/publication/bp299/> (acceso marzo de 2012).

⁵ Véase <http://www.pewhispanic.org/files/2010/10/127.pdf> (acceso marzo de 2012).

Cathy Feingold es Directora del Departamento Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Anteriormente dirigió las actividades del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en la República Dominicana y en Haití, incluida la educación de los trabajadores y la formación sobre el activismo, así como metodologías populares para investigar y documentar los problemas de las mujeres y los trabajadores migrantes. Dirigió la respuesta humanitaria de dicha organización al terremoto sufrido por Haití en 2010.